



## **UN NUEVO PERÍODO POLÍTICO SE ABRE**

**Quito, octubre de 2007**

*Los análisis de coyuntura del CEP cuentan con el auspicio de Desarrollo y Paz de Canadá, EED-Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo, Pan para el Mundo de Alemania e Hivos de Holanda.*

## **UN NUEVO PERÍODO POLÍTICO SE ABRE**

Los resultados electorales del 30 de septiembre de 2007 cierran un período dentro de la actual etapa democrática y abren un campo de perspectivas en el que caben expectativas e interrogantes. Este período culmina con el cumplimiento de la principal oferta de campaña de Rafael Correa: la Asamblea Constituyente.

Una Constituyente que, en base a sus poderes plenos, no se limitará a dictar una Constitución sino que procederá a una renovación parcial de las instituciones estatales y a legislar en estrecha relación con el gobierno.

Los resultados electorales marcaron el hundimiento, tal vez definitivo, de los partidos políticos que protagonizaron cerca de treinta años de democracia; y significaron la inclinación del electorado ecuatoriano a pronunciarse mayoritariamente por una sola opción... en términos lúdicos, a jugarse el todo por el todo a un solo casillero de la ruleta. Por primera ocasión, un movimiento político naciente se impone con tanta contundencia en tres elecciones seguidas –la elección de Rafael Correa, la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y el triunfo abrumador de Alianza País, tendencia de gobierno, en la elección de asambleístas-; y esto último ocurrió en todas las regiones, cuando hasta hoy, la característica había sido de una segmentación regional de la votación –ningún partido por sí solo alcanzó en una elección pluripersonal la mayoría absoluta- y una regionalización del voto, con partidos muy votados en una región, pero sumamente débiles en otra. En esta ocasión, Alianza País alcanzó entre el 50 y el 75% de los votos en por lo menos 20 provincias (de las 23).

Si bien se puede argumentar que la intervención del presidente Rafael Correa en el período electoral fue determinante, no es menos cierto que la oposición ha desaparecido por el momento y que las dos fuerzas electorales que siguieron en segundo y tercer orden – Sociedad Patriótica apuntalada por el ex presidente Lucio Gutiérrez y el PRIAN financiado por Álvaro Noboa- gozaron también de condiciones relativas ventajosas frente al resto de opciones; sin embargo de lo cual, su electorado es hasta cuatro o cinco veces inferior al de Alianza País.

La derecha económica no consiguió integrar un solo frente, sus dirigentes participaron en el proceso electoral atomizados, en el afán de convertirse tras estas elecciones, en los nuevos representantes del sector. La izquierda que quedó por fuera de Alianza País, buscó también probar suertes e intentar aglutinar por separado a los distintos fragmentos, paradójicamente dispersándolos y polemizando entre sí. En ese sector, tal vez la fuerza política más afectada podría ser Pachakutik, que a nombre del movimiento indígena tuvo un sorprendente surgimiento hacia 1996, pero que desde

entonces no consiguió fortalecerse y se encuentra ahora obligada a revisar toda su estrategia y preguntarse si todavía representa al sector indígena y si no comparte una profunda crisis conjuntamente con la propia organización indígena nacional, la CONAIE.

Las líneas anteriores nos llevan a adelantar una de las interrogantes que el fenómeno Correa y Alianza País genera: las enormes dificultades que va a vivir el movimiento social para recuperarse, reconstituirse y fortalecerse al margen del gobierno. Parece visible que el peso específico de Alianza País será un obstáculo para la renovación necesaria de un movimiento social independiente del gobierno y que actúe como tal, como un contrapeso.

Por tanto, sin una oposición de derecha fortalecida, sin una alternativa en el campo de la propia izquierda y con movimientos sociales sumamente debilitados o con relaciones ambiguas con el gobierno, la responsabilidad de marcar límites al ejercicio del poder y evitar autoritarismos recae en las propias manos del gobierno y de Alianza País, obligada a fijarse sus propios linderos y a promover un ambiente democrático de debate y de creación de consensos enriquecidos en el espacio del desacuerdo. Elementos como los medios de comunicación tampoco aparecen como factores de contrapeso y favorables a encontrar un equilibrio, pues se han convertido, incluso sin asumirlo expresamente, en la última trinchera de los intereses corporativistas y de las élites del poder económico.

## **LAS EXPECTATIVAS Y EL DISCURSO PRESIDENCIAL**

Mientras tanto, las expectativas que se abren, se afirman en el propio discurso presidencial acompañado por un carisma particular y poco común del presidente Rafael Correa, y que en el futuro el gobierno buscará concretarlos en políticas a mediano plazo, dentro del propio Plan de Desarrollo presentado en los últimos meses:

- Fortalecimiento del Estado frente a un largo período de dubitaciones neoliberales, pasos en falso y políticas que a nombre del robustecimiento del sector privado frente al Estado, han socavado las bases del segundo y no han permitido el despegue del primero.
- Renovación del pacto político y del acuerdo social con la aplicación de una línea política dura, con confrontaciones abiertas con actores económicos y políticos determinados, línea leída por más de un sector como autoritaria.
- Aplicación, sin ruborizaciones, de subsidios y ajustes tributarios que apuntan a disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres. En

términos de subsidios, se pueden señalar tres notas diferenciadas con políticas anteriores: la conversión del bono de desarrollo incrementado en un instrumento de microcrédito y en el marco de un cambio de concepción del ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social; la ampliación del bono de la vivienda pero sacándolo de esquemas de construcción de conjuntos habitacionales gerenciados desde el Estado sino dispersándolo por todo el país bajo un esquema de acuerdo entre el beneficiario y el constructor privado local; y la apertura de una línea de crédito subsidiado para pequeños productores.

- Aplicación de programas que favorezcan a los sectores productivos nacionales y a la inversión del ahorro nacional; propuesta que pone en cuestión la exportación del ahorro nacional protagonizado por el sistema financiero y el Banco Central, que mantienen importantes volúmenes de dinero en el sistema financiero norteamericano.
- Participación en una estrategia regional que busque una ingeniería financiera por fuera de la tradicional vinculación con el FMI y el Banco Mundial; estrategia que se concreta, por el momento, en la creación del Banco del Sur como una fuente de crédito menos rígida y alimentada por los propios países de América del Sur, y que podría ampliarse con la creación de una especie de FMI sudamericano, evocado en los discursos oficiales de algunos países.
- Revisión profunda de los términos aceptados por el Estado a lo largo de la última década y media, en cuanto a convenios y acuerdos con el sector privado (particularmente multinacional) en áreas como las telecomunicaciones, la explotación y comercialización petrolera, la provisión de combustibles (con la creación de infraestructura estatal que disminuya la dependencia de la importación de derivados).
- Un discurso marcadamente crítico hacia el sector que controla la economía privada, financiera y productiva, en el afán de desmontarlo, pero sin concreciones todavía. Una intención manifiesta de desmontar el corporativismo, con la reforma de aquellos espacios del Estado en los que existe presencia de los sectores privados.
- El fortalecimiento de la infraestructura hidroeléctrica, vial, de riego, a ser manejada en gran medida por el Estado, frente a la tendencia de la creación de entes privados encargados de administrar recursos públicos.
- Diseño de una nueva organización territorial del país que favorezca procesos de descentralización. Se podría ensayar en este punto una cierta confrontación entre los afanes descentralizadores y el interés del Ejecutivo de controlar centralizadamente ámbitos del Estado que han actuado hasta

hoy con cierta autonomía, como Banco Central, Superintendencias, Contraloría. Este hecho se manifiesta, a pesar de que en la reforma constitucional se apunte a una independencia de los organismos de control.

- La recuperación, para el Estado, del rol planificador desaparecido en la primera mitad de los años noventa; se reinstauró la Secretaría Nacional de Planificación que elaboró un Plan de Desarrollo para el período presidencial y que ha ido concentrando roles cada vez mayores que le convertirán en el ente rector de las políticas estatales.
- El Plan de Desarrollo es un paso esencial que ha tardado varios meses en concretarse; es producto de una serie de mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad. La conclusión del Plan de Desarrollo es un paso importante que permitirá al gobierno orientar y evaluar de forma más sistemática su propuesta política. El Plan se compone de doce ejes que subrayan la búsqueda de cohesión social y equilibrio regional, mejorar la calidad de vida de la población con acceso a servicios; soberanía nacional y construcción de integración regional; un sistema económico solidario con apoyo al pequeño productor y con generación de empleo, y construcción de una sociedad participativa e intercultural.

Por el momento, estos campos de intervención se han alimentado de decisiones aisladas del gobierno tomadas al calor del debate al interior del régimen y a nivel nacional; acciones que hacen parte del Plan de Desarrollo y se desarrollarían a través de proyectos de ley que el ejecutivo piensa canalizarlos por medio de la Asamblea Constituyente.

## **UNA RENOVACIÓN POLÍTICA**

En cuanto a los interrogantes que se abren, podríamos borrar unos pocos:

- La posibilidad de una renovación política a partir de la Asamblea Constituyente es, todavía, un fenómeno posible, pero no necesariamente ha ocurrido como resultado natural del hecho electoral del 30 de septiembre. La profunda inestabilidad de las instituciones democráticas en la última década y media y en general la poca permanencia de las mismas en el tiempo, produce un efecto sobre las organizaciones políticas que no alcanzan a proyectarse y son víctimas constantes de esa inestabilidad. Por tanto, es necesario observar lo que va a ocurrir a mediano plazo con el movimiento Alianza País y con la fuerza política fundada en la personalidad de Rafael Correa; y si este movimiento político no acabará confundiendo en medio de la persistencia de viejas prácticas políticas.

- Esta última afirmación nos lleva a otra: para alcanzar el triunfo de Alianza País, el movimiento ha debido echar mano de algunos rezagos de la vieja política: utilización de cacicazgos locales, reciclaje de figuras políticas del pasado, manejo de un discurso muy general que no ha permitido, precisamente, un debate más a fondo del significado de una Asamblea Constituyente. Si bien estos rezagos no son, exactamente el corazón que mueve al movimiento y que determinan su fuerza, no hay ninguna razón para pensar que el fenómeno político de Alianza País surge virginal, por generación espontánea, en medio de un vacío político y de una corrupción del ejercicio de la política que ha acabado determinando el hundimiento de la llamada “partidocracia”. Si bien plantea una renovación, nace en el marco de una crisis institucional y de un “ambiente” político que todavía no se ha renovado del todo.
- La renovación de la clase política tiene importancia, no precisamente porque veamos intervenir a nuevos actores, sino porque ellos serán la garantía de que lo que existe de general y de principio en la Constitución nueva, se plasme en las leyes secundarias que deberán crearse posteriormente. Solo esa continuidad puede darle sentido a la reforma constitucional. De lo contrario ocurrirá algo similar a lo ocurrido en 1998, cuando las fuerzas políticas que se aliaron para dictar la Constitución se atomizaron y enfrentaron, con lo cual la Constitución quedó como letra muerta.
- El presidente Correa resume su proyecto político como “no sólo una época de cambios sino como un cambio de época”; y acompaña a esta afirmación del concepto, acuñado en los meses recientes, de un “socialismo del siglo XXI” que no quiere que sea homologado con el proclamado por Hugo Chávez. Un socialismo que en el discurso de Rafael Correa se sustenta, no en un modelo acabado, sino en un conjunto de propuestas que giran en torno a derrotar las inequidades sociales y económicas, fortalecer el Estado con pleno respeto de la propiedad privada, delimitar claramente lo público de lo privado, conseguir una democracia participativa, entre otros.
- Por el momento la formulación no va más allá y busca ser, sobre todo, un proyecto para avanzar con énfasis en principios como el nacionalismo y la soberanía nacional; lo que incluso le lleva a delimitar campos con el régimen de Hugo Chávez o Evo Morales. Pero, como afirma el propio Correa, llegar al poder no significa contar con el poder, frente a élites económicas y particularmente financieras cuyos intereses permanecen aún intocados; apenas si se lo ha puesto en cuestión y se ha levantado el debate sobre ellos. Por ejemplo, el cuestionamiento a los bancos está en el debate ciudadano, aunque todavía no se ponga coto a ese poder discrecional.

## **EL PELIGRO DE UN BOOMERANG**

La mayor incógnita este momento gira en torno a cuánto pueda avanzar con éxito el gobierno de Rafael Correa en sus reformas, sin que éstas sean ahogadas por una conspiración de los sectores de poder fáctico; hasta qué punto consiga inyectar eficacia a un equipo de gobierno que no necesariamente avanza con la urgencia que pretende el presidente y que no podrá avanzar a fondo si no se alcanza en la Asamblea Constituyente reformas legales e institucionales indispensables para el proyecto presidencial; cuánto consiga concretar en la Asamblea Constituyente el rol legislativo de dicha Asamblea que elegirá de entre sus miembros una Comisión Legislativa que reemplace al Congreso por cesar en sus funciones, un rol que coyunturalmente será más público y polémico que la propia redacción de la nueva Constitución por su evidente incidencia sobre la coyuntura; en qué medida se mantendrá la cohesión en el bloque de asambleístas de Alianza País, cuyo origen político e ideológico es heterogéneo, aspecto que se vuelve básico incluso más allá de la vigencia de la Asamblea, pues del núcleo de los 80 asambleístas de Alianza País surgirán los cuadros políticos del futuro movimiento o partido liderado por Rafael Correa.

El propio presidente ha evocado, por más allá de la euforia por el éxito electoral, la preocupación por la dimensión de ese éxito, que deja en manos del gobierno y de su movimiento político toda la responsabilidad en las reformas. Dada la dimensión del cambio en la actitud del electorado, en tres procesos electorales seguidos, un fracaso hundiría no solo el proyecto de Alianza País sino que crearía una profunda desazón y desaliento en un país que viene desde hace casi dos décadas, dando solo traspiés.

El país entrará, desde este mes de noviembre, en un período eminentemente político que se prolongará por alrededor de un año. En primer término están los seis meses de Asamblea, que por el alcance de sus reformas a la Constitución y legislación generará reacciones de diversa índole y dará lugar a un período de debate y agitación política; inmediatamente después vendrán elecciones generales para renovar poderes nacionales y seccionales, lo que prolongará la preeminencia de lo político hasta el último trimestre de 2008.

Ciertos sectores económicos miran como inestables y desfavorables para los emprendimientos económicos la prolongación de los procesos políticos, pero tampoco el país podía soportar la inestabilidad de la última década, que exigía un cambio profundo en la institucionalidad pública. En la renovación de esta institucionalidad y en el logro de ciertos cambios sociales y de relaciones económicas, radicará la posibilidad de evitar que el éxito del 30 de septiembre se convierta en un boomerang.